



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.

Medellín, cinco (05) de agosto de dos mil veintidós (2022).

DEMANDANTE:	JADER RESTREPO PALACIO y otros.
DEMANDADO:	VEHICENTER S.A.S. en liquidación.
TIPO DE PROCESO:	ORDINARIO.
DECISIÓN:	REVOCA.

En la fecha, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados, Nancy Gutiérrez Salazar y Carlos Alberto Lebrún Morales, dado que la Dra. María Eugenia Gómez Velásquez se encuentra en permiso, procede a resolver el Recurso de apelación presentado por la Parte demandante, en el Proceso Ordinario Laboral adelantado por **JADER RESTREPO PALACIO** y **ANA MARÍA GIRALDO YEPES** en nombre propio y en representación de su hijo menor **SAMUEL STIVEN ORREGO GIRALDO** en contra de **VEHICENTER S.A.S.** en liquidación.

Sin **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA.**

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

ANTECEDENTES

Solicita la Parte actora que se decrete como medidas cautelares, la inscripción de la demanda ante la Cámara de Comercio de Medellín, y que la demandada preste caución.

Como soporte de su pedimento expone que mediante Acta N° 25 del 13 de octubre de 2020, la demandada inició Proceso de disolución y liquidación. Y que, en la actualidad solo están vinculados a esta, el demandante y la contadora; acreditándose que ante una eventual condena, el cumplimiento de la Sentencia sería nugatorio.

TRÁMITE PROCESAL.

El Juzgado del conocimiento en Auto del 18 de abril de 2022, luego de admitir la demanda, negó la medida cautelar solicitada en esta.

Argumentó la A quo que no se cumple con las condiciones establecidas en el artículo 85A del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, al no inferirse que la demandada este efectuando actos tendientes a insolventarse, a impedir la efectividad de la sentencia,

o que se encuentre en graves dificultades para el cumplimiento de la obligación, y que además, en el Proceso no existe certeza del derecho reclamado.

APELACIÓN DEMANDANTE.

Dice que la demandada se encuentra en Proceso de liquidación, lo que afecta un eventual cumplimiento de la sentencia. Y que al momento de decretarse las medidas cautelares, no debe hacerse valoraciones sobre la certeza del derecho reclamado, buscándose con tal medida prevenir que la Sentencia no se pueda ejecutar.

CONSIDERACIONES:

- Competencia: Principio de Consonancia art. 66A del C.P. T. y S.S., adicionado, artículo 35 de la Ley 712 de 2001.
- Objeto: Determinar si en el caso a estudio, son o no procedentes las medidas cautelares solicitadas por la Parte demandante, atendiendo a lo establecido en el artículo 85A del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. Veamos:

MEDIDA CAUTELAR.

Al tenor de lo dispuesto en el art. 37A de la Ley 712 de 2001, que adicionó el Art. 85A del C.P.L., en el Proceso Ordinario Laboral procede como medida cautelar, la caución, siempre que se acredite que el demandado está realizando actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o si el juez considera que este se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de la obligación. Así lo estipula la referida disposición normativa:

“Cuando el demandado, en proceso ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, podrá imponerle caución para garantizar los resultados del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente proceso entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar...”.

Sobre el particular, la Sala de Cas. Lab de la C.S.J. en Auto 7198 Rad 70331 del 25 de octubre de 2017, M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán, refiriéndose a la Sentencia C-379 de 2004 que declaró exequible el referido artículo, destacó que el “propósito o finalidad de la referida disposición es la efectividad o cumplimiento de la sentencia condenatoria que se llegare a proferir dentro del proceso ordinario, y que en cada caso concreto se debe examinar el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley para establecer la procedencia de la medida”, con la finalidad de que el demandante “tenga una respuesta eficiente por parte de la administración de justicia, protegiendo el derecho fundamental al debido proceso, y evitando el desconocimiento del ordenamiento jurídico vulnerado en apariencia”; destacando además que: “... el artículo 85A del CPT y de la SS, tiene sustento en el artículo 48 del mismo código, el cual le impone la obligación al juez de adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite”.

A su vez, la Corte Constitucional en la Sentencia C-043 del 25 de febrero de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, declaró exequible de forma condicionada el referido artículo 37A, bajo el entendido de que en la Jurisdicción Ordinaria Laboral también pueden

invocarse las medidas cautelares innominadas previstas en el literal "c", numeral 1, del artículo 590 del Código General del Proceso, las cuales, según la Sentencia C-835 del 20 de noviembre de 2013, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla, “son aquellas que no están previstas en la ley, dada la variedad de circunstancias que se pueden presentar y hacen difícil que sean contempladas todas por el legislador...”. Así lo consideró esta Corporación en la primera de las Sentencias referidas:

“...la Sala considera que existe otra interpretación posible de la norma acusada que permite garantizar el derecho a la igualdad de los justiciables del proceso laboral y también superar el déficit de protección evidenciado. Consiste en sostener que el art. 37A de la Ley 712 de 2001 sí admite ser complementado por remisión normativa a las normas del CGP, dado que el primero no contempla una disposición especial que proteja preventivamente los derechos reclamados en aquellos eventos donde la caución es inidónea e ineficaz. Aplicación analógica que procede únicamente respecto del artículo 590, numeral 1º, literal "c" del estatuto procesal general, es decir, de las medidas cautelares innominadas, por las siguientes razones...

La posibilidad de aplicar analógicamente las medidas cautelares innominadas del proceso civil en el laboral se debe a que con ellas el legislador responde "a la variedad de circunstancias que se pueden presentar"[113] en el proceso, por lo que resultan idóneas y eficaces para prevenir daños y garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de los trabajadores en sus distintas dimensiones...

... las demás medidas previstas en el art. 590 del CGP responden a solicitudes específicas del proceso civil...

Así, la referida interpretación judicial del artículo acusado aumenta significativamente la garantía del derecho de acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva de los justiciables del proceso laboral, pues para decretar la medida cautelar innominada el juez seguirá los parámetros establecidos por el art. 590 del CGP...”.

Así las cosas, en el caso a estudio la medida cautelar solicitada por la Parte demandante, consistente en la **inscripción de la demanda** en el Registro mercantil de la Sociedad demandada no es procedente, ya que esta, según lo dispuesto en los literales a y b del artículo 590 y siguientes del C.G.P., es propia de los Procesos declarativos civiles y no del Proceso ordinario laboral, en el cual como quedó visto, las únicas medidas cautelares válidas son la caución y las innominadas, siempre que sean razonables para la protección del derecho objeto del litigio y que se cumpla con lo dispuesto en el referido art. 37A.

Ahora, en lo referente a la medida cautelar de **caución**, encuentra la Sala que a folios 149 a 155 del archivo 01 -Primera Instancia-, obra el Certificado de Existencia y Representación Legal de la demandada en el que se lee:

“DISOLUCIÓN. La persona jurídica se disolvió y entró en estado de liquidación mediante Extracto de Acta N° 25 del 13 de octubre de 2020, de la Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de octubre de 2020 con el N° 23273 del libro IX”.

Atendiendo a lo anterior, considera la Sala que si bien no se acreditó que la demandada esté efectuando actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, lo cierto es que el demandante sí logró demostrar que la misma está en serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, pues entró en estado de liquidación, situación que le puede llegar a impedir el cumplimiento efectivo de una eventual condena, cumpliéndose así en criterio de la Sala con los presupuestos fácticos del referido Art. 85A para ordenar la medida cautelar solicitada; la cual, con base en el valor de las pretensiones de la demanda, estimado por la Parte actora en la suma de \$425.053.038 –fls. 146 a 148-, y el criterio de proporcionalidad previsto en la norma en estudio que faculta al juez a determinar una suma entre el 30% y el 50% del valor de las mismas, considera la Sala que se debe fijar en la suma de \$170.021.215, esto es, en un 40% de dicho valor; suma que se

ajusta a lo previsto en el inciso último del Art. 603 del C.G.P., que estatuye que cualquier caución constituida debe ofrecer efectividad. La misma según el inciso final del tan aludido Art. 85A, debe prestarse en el término de 5 días siguientes a la notificación de la misma.

REVOCA.

Sin Costas Procesales de segunda instancia, las cuales no se causaron dada la prosperidad del recurso interpuesto, y al no haberse trabado la Litis con la Parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,


RESUELVE


PRIMERO: REVOCAR el Auto proferido por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín el 18 de abril de 2022, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por los Señores **JADER RESTREPO PALACIO** y **ANA MARÍA GIRALDO YEPES**, en nombre propio y en representación de su hijo menor **SAMUEL STIVEN ORREGO GIRALDO**, en contra de **VEHICENTER S.A.S.** en liquidación, que negó la medida cautelar; para en su lugar, imponer a la demandada la obligación de prestar caución dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la misma, en la suma de \$170.021.215, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta Providencia.

SEGUNDO: Sin Costas Procesales de segunda instancia.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** y se firma en constancia.

Los magistrados;


NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

(EN PERMISO)
MARIA EUGENIA GOMEZ VELAZQUEZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL -
HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N°
138 de agosto 08 de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>